

Daniel Viaña

EL SHOCK ECONÓMICO

Cómo el Covid ha colapsado el mundo.
60 de las mentes económicas más relevantes
de España dan las claves para
la reconstrucción y hablan sobre el declive
de la clase media, los nacionalismos
o el peor sistema educativo de Europa

Prólogo de John Müller

la esfera  de los libros

Índice

<i>Prólogo. Primera lección de la pandemia: la historia no está escrita</i> , de John Müller	11
<i>Introducción</i>	23
1. La mayor crisis en tiempos de paz y la reacción del Gobierno	25
2. El Gobierno más sobredimensionado de la historia	37
3. Subir impuestos durante la peor recesión: ¿puede salir algo mal?	47
4. Los fondos europeos: entre el miedo a un Plan E y la corrupción	59
5. Vivir peor que tus padres y el fin de la clase media	69
6. El papel desestabilizador de Podemos y el fin de Ciudadanos	79
7. De cuando descubrieron que el Escrivá político no les gustaba tanto	91

8. Las pensiones, los sueldos públicos y el egoísmo frente al sector privado	103
9. Trabajar hasta los setenta y cinco años	113
10. El mágico cupo vasco y la Baviera catalana ..	123
11. Madrid, Distrito Federal	137
12. ¿El peor sistema educativo de Europa?	149
13. Y por encima de todo, Sánchez el Inasequible	165
<i>¿Quiénes son los especialistas entrevistados?</i>	<i>175</i>

Prólogo

Primera lección de la pandemia: la historia no está escrita

(Sin embargo, la educación puede llegar
a cambiarlo todo)

La crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 no tiene precedentes en la historia moderna. Es parecida a una guerra, en términos de reordenamiento social y económico, pero no deja el nivel de destrucción física que produce esta. Ni siquiera las pandemias del pasado se le parecen. Antes, las enfermedades infecciosas iban ocupando territorios, avanzando sobre el mapa al ritmo de los medios de transporte de la época, pero nunca contaron con el nivel de simultaneidad con la que hemos vivido el despliegue del coronavirus desde Wuhan hasta la última isla de la Polinesia. Me sigue impresionando el dato de que, en abril de 2020, la Unesco informó de que 1.600 millones de niños se encontraban sin clases presenciales por el cierre educativo en 188 países del mundo. Solo habían transcurrido cuatro meses desde el descubrimiento del primer caso de Covid-19. Esa es la magnitud del desafío global que se planteó a comienzos de 2020.

España ha sido uno de los países europeos que se ha visto más afectado por la pandemia. Fue el que sufrió la caída más fuerte de su actividad y el que ha experimentado el rebote más débil. Pero también es uno de los que recibirá más ayudas de sus socios de la Unión Europea. Gran parte de las razones de que esto haya sido así están recogidas en las opiniones que sesenta economistas han ido formulando a lo largo de esta crisis en una serie de entrevistas que Daniel Viaña fue realizando para el diario *El Mundo* bajo el epígrafe de «Economistas para la reconstrucción». Esas entrevistas son el material básico de este libro, que es un primer relato de la faceta económica de la pandemia. Viaña forma parte del elenco de jóvenes talentos del periodismo económico español y es un pilar fundamental en la cobertura que *El Mundo* hace de la macroeconomía en España. Su historia personal es la de muchos *millennials* españoles que iniciaron su vida laboral en medio de las enormes turbulencias que creó la crisis financiera de 2008 y que ya habían comenzado a superarla después de años de sacrificios y restricciones, pero que se han encontrado con una nueva crisis que les ha sorprendido ya con la experiencia suficiente, no solo para sufrirla sino también para contarla.

En términos económicos, esta pandemia ha sido un enorme *shock* del lado de la oferta agregada. Estas grandes interrupciones en la oferta, generalmente provocadas

por un desastre natural, un incremento en los precios de los insumos o un avance tecnológico revolucionario, no son tan comunes como las que se producen por el lado de la demanda. Por esta razón, uno podía esperar que los economistas de todo el mundo le dedicaran mucho de su tiempo al análisis y descripción detallada del mismo, pero no fue así. Muy pronto se vio que los expertos estaban más interesados en pasar la página de la oferta y contemplar el asunto desde el lado de la demanda. Y esto fue así por una cuestión muy sencilla y práctica: para las autoridades económicas, los *shocks* de oferta de esta magnitud son casi imposibles de manejar eficazmente, porque requieren un nivel de intervencionismo para el que las administraciones públicas no están preparadas y las sociedades democráticas no lo soportarían. Así que se sigue actuando a través de políticas económicas, como la monetaria o fiscal, que influyen fundamentalmente por el lado de la demanda agregada.

Además, la pandemia fue un fenómeno que impactó en la economía, pero era ajeno a esta. Muchos observadores insisten en comparar esta crisis con la de 2008, cuando aquella fue fruto de un mal funcionamiento de los mecanismos económicos. La formación de burbujas —facilitada por el levantamiento de determinados controles legales— o la creación de instrumentos sofisticados que debilitaron al sistema fi-

nanciero, no tienen nada que ver con la inesperada aparición de un virus que se transmitió aceleradamente por todo el orbe y que si a algo se asemeja es al impacto de un meteorito.

Recuerdo perfectamente el día que Viaña me llamó para pedirme que le diera nombres de economistas, porque pensaba iniciar esta serie. El primero que le facilité fue el de Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, a mi juicio una de las personas con una visión técnica más omnicomprendensiva de la realidad española. Él fue el primer entrevistado de la serie y el último ha sido Manuel Lagares, personaje esencial de la historia económica de España desde la Transición. Sesenta entrevistas no permiten una muestra exhaustiva, pero sí bastante representativa de lo que piensan los economistas españoles.

En términos generales, me han llamado la atención dos cosas de estos testimonios. La primera es que existe un consenso bastante amplio sobre las reformas y tareas pendientes de la economía española y aunque hay puntos de vista divergentes, da la impresión de que no sería difícil llegar a un acuerdo. Una prueba de ello es el apreciable esfuerzo hecho por José Ignacio Conde-Ruiz, Juan F. Jimeno, Alfonso Novales y Rafael Salas por alumbrar en octubre de 2020, apenas seis meses después de la dictación del primer estado de alarma, un documento que denominaron «Propuesta para la

reconstrucción del entorno productivo».* Se trata de un conjunto de actuaciones articuladas para la reconstrucción del entorno productivo, con la ayuda de los fondos europeos, ordenadas a partir de diez grandes líneas de actuación. Más de 150 académicos y expertos han apoyado este documento añadiendo su firma al mismo. Sin embargo, como reveló Alfonso Novales en entrevista con Viaña, el texto fue recibido con frialdad y desinterés por las autoridades políticas.

La segunda cuestión es lo mucho que hablan de política los economistas españoles. Algunos directa y otros indirectamente, pero en todos ellos hay una crítica que da forma a una imagen de la política como una caja negra que toma decisiones arbitrarias, poco transparentes, más cercanas a la magia de un chamán y que permanentemente frustra las buenas ideas o contradice el conocimiento científico. A veces algunos de ellos se atreven a explorar las razones que hacen que esto sea así, pero, en términos generales, la política es vista como una barrera insensible que no permite que las cosas mejoren en el país.

* «Propuesta para la reconstrucción del entorno productivo». Grupo de trabajo sobre actuaciones para la reconstrucción del entorno productivo en el contexto del Next Generation EU Program y del Marco Financiero Plurianual de la UE. <https://www.ucm.es/icae/reconstrucion>

Y no es extraño que esto sea así porque quizá una de las lecciones más descorazonadoras que nos deja lo vivido es que ni una situación extrema de vida o muerte como la pandemia, que ha amenazado las bases del funcionamiento de nuestra sociedad, ha conseguido que los dos principales partidos españoles se pusieran de acuerdo para enfrentar la situación a cuatro manos y dejaran de tirarse los trastos a la cabeza. La falta de acuerdos y consensos es uno de los aspectos más sorprendentes —y criticables— de esta etapa.

El principal argumento a favor de un gran acuerdo nacional era la reducción de la incertidumbre, que es el factor más citado en los primeros meses de la pandemia. A partir del verano de 2020 dicho acuerdo es mencionado como elemento clave para la gestión eficaz de los fondos europeos.

El elenco de cuestiones que han preocupado a nuestros economistas durante la crisis es variadísimo: la incertidumbre fiscal y tributaria, la devaluación de la marca España, el equilibrio entre el apoyo fiscal (ERTE) y la retirada de los mismos, la falta de protagonismo concedida al sector privado en el combate de la pandemia, el extraordinario impacto de los confinamientos en el PIB, el futuro de la financiación autonómica, el riesgo de que la pandemia desemboque en una crisis financiera, la pérdida de bienestar, el castigo a los autónomos, la caída de la esperanza de vida (se

perdieron nueve meses de la esperanza de vida española en los tres meses más duros de la pandemia, según el profesor José Antonio Herce), la incapacidad de la Administración para adaptarse a la situación, el explosivo crecimiento del déficit y la deuda, los nuevos efectos de la economía digital, la desigualdad intergeneracional...

Pero hay tres temas que merecen una consideración especial. El primero es la posibilidad de que la pandemia cambie radicalmente nuestro modelo productivo. En la medida que los confinamientos aceleraron las tendencias que ya estaban esbozadas e hizo emerger otras que estaban latentes, se espera una transformación digital intensa de nuestro modelo económico, un cambio en la forma en que trabajamos y consumimos, y una oportunidad para que España ascienda por las cadenas de valor mundiales mejorando la calidad de nuestro tejido productivo.

En muchos casos, la fuerza transformadora de la pandemia ha desatado el entusiasmo por intentar usarla para cambiar el modelo. Se libera así ese planificador infantil que todos llevamos dentro cuando jugamos a construir ciudades. No deja de ser paradójico que esto ocurra precisamente cuando estamos ante un fenómeno no planificado y azaroso como una pandemia.

Un segundo asunto tiene que ver con los grandes parámetros (PIB, déficit y deuda), la consolidación fis-

cal, la reforma tributaria y la financiación autonómica. Son asuntos donde casi todos los economistas tienen ya un criterio formado, donde las comisiones de expertos del pasado dialogan con las comisiones de expertos del presente y las del futuro, pero donde falta una cuestión esencial: voluntad política y recursos.

Otros dos elementos juegan aquí. El primero son las decisiones que tome la Unión Europea en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre 2022 y 2023. Estas van a determinar la magnitud del esfuerzo que España tendrá que hacer en relación con los grandes números de la economía y la certeza de que eso condicionará todo lo demás. El otro es la cuestión catalana, que un grupo muy prominente de economistas insiste en insertar a través del debate de la financiación autonómica, a la que se le atribuye la capacidad de reordenar el Estado al margen del texto constitucional, como de hecho ha ocurrido con la Constitución de 1978. El debate de si Cataluña puede ser Baviera que abrió Andreu Mas-Colell tiene muchas aristas, pero la principal consecuencia, a mi juicio, es que rebaja el horizonte nacional catalán a contentarse con ser una subunidad estatal. El objetivo ya no es un estado independiente, sino una región prominente. El modelo no es Lituania, es Baviera.

Por último, en el tercer lugar figura un asunto que despierta una gran unanimidad: la necesidad de refor-

mar nuestro sistema educativo. Este debate comprende una serie de fenómenos económicos que van desde nuestra vida escolar hasta la muerte. Javier Díaz-Giménez lo dice con rotundidad: «Tenemos los sueldos que tenemos por la educación que tenemos». El sistema educativo tiene que ver con el lugar que ocupamos en el mundo (la inserción laboral), con el salario que recibimos a lo largo de nuestra vida, con la forma y duración de las carreras laborales y con las pensiones de jubilación. No hay un factor tan decisivo y que condicione tanto la vida de los españoles como la educación. Por eso no se entiende la falta de interés de los políticos por abordar esta cuestión.

Coja usted el tema que quiera de la economía española y, tirando del hilo, llegará a la educación de los ciudadanos como factor decisivo.

Pues resulta que la educación es uno de los aspectos que más ha sufrido el impacto de la pandemia. Primero por la pérdida de la presencialidad. Es verdad que España es uno de los países donde este fenómeno ha estado más acotado. Los estudiantes volvieron a clases en septiembre de 2020, mientras en otros países de nuestro entorno como Italia esto no ocurrió hasta después del verano de 2021. Países como Chile estaban a punto de completar, en diciembre de 2021, dos cursos completos sin clases presenciales regulares en la escuela pública.

Sin embargo, las evaluaciones para superar el curso en España se relajaron mucho en 2020 y la Ley Celaá fue interpretada como una vuelta de tuerca más en la rebaja de la exigencia académica. No cabe duda de que la pandemia tendrá un efecto en las vidas laborales. Como señalan los economistas, las generaciones españolas que están en la universidad ya han padecido la experiencia de dos grandes crisis, la de 2008 y esta, y eso impacta en que tienen salarios más bajos al empezar a trabajar y ese déficit se mantiene durante los primeros diez años de su vida laboral.

Este trabajo de Daniel Viaña también es una magnífica manera de tomarle el pulso al futuro. Hay una frase que José Luis Malo de Molina, quien fuera director general de estudios del Banco de España durante casi dos décadas le dice a Viaña: «Había una teoría, la de la Gran Moderación, que preconizaba que en un mundo donde la política económica era tan sofisticada ya era posible vivir en un crecimiento permanente sin inflación. Gran error. Y ahí pecamos todos». El economista se refiere fundamentalmente a la crisis financiera que empezó en 2008, pero esa complacencia intelectual con la sofisticación alcanzada por la ciencia económica también puede aplicarse a lo que hemos vivido en tiempos del Covid. La España del futuro próximo estará profundamente marcada por la experiencia de la pandemia, un fenómeno no planificado, inesperado, global,

que irrumpe en nuestra existencia sin pedir permiso y poniéndolo todo patas arriba. Pienso que la principal lección que debemos sacar es que la historia, nuestra historia, no está escrita. Y por eso puede cambiar.

JOHN MÜLLER

Introducción

Economistas para la Reconstrucción nació en mayo de 2020, en pleno confinamiento, por lo tanto, y cuando se desconocía en gran medida cuál sería la magnitud de la crisis económica derivada del coronavirus. Sus consecuencias, sus ramificaciones, el resultado de parar casi totalmente la economía mundial.

Ese desconocimiento y la necesidad de buscar al menos algunas respuestas dieron como resultado una serie de sesenta entrevistas publicadas en *El Mundo*, que a su vez han dado lugar a este libro. Además de aportar ideas y soluciones con las que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero que sin duda proceden de las mentes más brillantes de España, supone también un diario de lo que ocurrió durante 14 meses. La crisis económica pero también la política, la «Baviera catalana» y el mágico cupo vasco; «la injusticia» de subir las pensiones y también el sueldo de los funcionarios el año que trabajaron «menos que nunca», el Gobierno

más numeroso y la «malísima» tesis doctoral del presidente Sánchez; «trabajar hasta los setenta y cinco años»; e incluso el fin de Ciudadanos y el «mayor error de la democracia» que cometió Albert Rivera.

LA MAYOR CRISIS EN TIEMPOS DE PAZ Y LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

España sufrió en 2020 su mayor colapso económico en tiempos de paz. Lo sabemos. El Producto Interior Bruto (PIB) español fue además el que experimentó un mayor desplome de toda la Unión Europea y también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ni Italia ni Sudáfrica ni Argentina ni Reino Unido ni México. España. Y una razón fundamental que explica este hundimiento reside, sin duda, en las características económicas, la estructura del PIB. La dependencia del turismo y los servicios es muy alta, y sin visitantes y con países cerrados, esa parte de la economía, evidentemente, no funciona. Pero hay otro motivo también muy relevante y que, a diferencia de las características económicas, sí se podía haber evitado: la reacción del Gobierno, que para muchos economistas fue un tanto lenta y desde luego no se llevó a cabo con el consenso que la grave situación derivada del coronavirus exigía. Uno de los

más duros al exponer esta idea es Juan Ramón Rallo, doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y una de las voces económicas más mediáticas de España. Y apuntó claramente a una fecha muy concreta: el 8-M.

—La gestión de la pandemia en el primer semestre probablemente fue la peor del mundo. El Gobierno fue absolutamente negligente, no tomó a tiempo medidas para minimizar el impacto y no hay excusa para que no las tomara, porque desde finales de febrero en el norte de Italia ya hubo confinamiento total. Aquí, hasta el 9 de marzo, y también por presiones de la Comunidad de Madrid, no empezaron a adoptarse medidas de distanciamiento social. Todo eso provocó que en la primera ola España tuviera, junto a Reino Unido, los peores datos de fallecidos y, obviamente, de impacto económico, porque ambos aspectos están muy relacionados. Y no olvidemos que la estrategia de Boris Johnson durante parte de marzo fue: «Dejemos que la población se infecte».

—¿A qué se debe la mala gestión?

—Sabemos que parte del Gobierno se oponía a tomar medidas preventivas por el daño que se pudiera hacer a la economía. En un primer momento quizá no estaba claro o no valoraron adecuadamente los riesgos de la pandemia. Pero claro, también planea la duda de si

se retrasó todo para permitir la manifestación feminista del 8-M. Mi argumento no es que los contagios se produjeron masivamente el 8-M, eso no parece que haya sido así. Lo que digo es que parece que las decisiones se empezaron a tomar el 9 de marzo porque hasta el 8 estaba prohibida internamente cualquier medida de distanciamiento social que hiciese peligrar esas marchas. Y si subordinaste las medidas sanitarias a una marcha feminista, lo que hiciste fue subordinar la política de prevención de la pandemia a los caprichos ideológicos del Gobierno de turno. Y fuera ese el motivo o no, lo cierto es que fuimos de los países que más tarde adoptamos medidas en relación con el nivel epidemiológico que teníamos.

El ejecutivo, sin duda, tenía ya indicios más o menos claros de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. «Pues tía, creo que al coronavirus», reconoció la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando se le preguntó a qué se debía que el número de personas asistentes a la manifestación de Madrid fuera sensiblemente inferior a la de un año antes. Pero el Gobierno decidió aun así permitir la concentración, así como un mitin de Vox y el también multitudinario concierto de Isabel Pantoja, entre otros eventos.

Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que no es precisamente una

organización extremista al servicio de intereses políticos contrarios al Gobierno y ante la que los detractores de Rallo tendrán, probablemente, mucho menos que objetar, puso de manifiesto lo siguiente:

Según nuestras simulaciones, el número de casos confirmados en la España peninsular hubiera aumentado, en ausencia de estado de alarma, de 126.000 a 617.000 casos a fecha de 4 de abril de 2020. Con dicha medida, por tanto, se han evitado alrededor de 491.000 infecciones confirmadas, lo que representa una reducción media del 79,5 por ciento en el número de contagios potenciales. Sin embargo, nuestras simulaciones ponen también de manifiesto que se hubiera podido ahorrar un número aún mayor de contagios y, por consiguiente de fallecimientos, si las medidas de control asociadas a la declaración de alarma se hubiesen puesto en marcha con solo una semana de antelación. El número de casos confirmados hubiera pasado a 47.000, menos de la mitad de los registrados a fecha de 4 de abril. Señalar finalmente que tal disminución hubiera evitado probablemente el colapso de muchos hospitales en nuestro país.

Con estos datos, los autores del informe ofrecieron una conclusión muy moderada pero, al mismo tiempo, rotunda. Es la siguiente, que se copia directamente del informe que lleva por título *How Effective has the Spanish Lockdown been to Battle COVID-19?* [¿Ha sido

efectivo el confinamiento para contener el Covid-19 en España?], por si el lector quiere profundizar en el documento:

El mensaje general del documento es que el actual confinamiento ha sido una herramienta efectiva para contener el brote de Covid-19 en España. Sin embargo, creemos que hubo una falta de previsión por parte del Gobierno, ya que no supo anticipar el desarrollo real del coronavirus en España.

Pero la realidad es que la decisión se anunció el 14 de abril, cuando las cifras eran ya muy elevadas, y el país se paró completamente a pesar de las dudas que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mostró en el Consejo de Ministros. «Te pido que no me hables en ese tono, Nadia. Así que ya está bien», le llegó a espetar el presidente Sánchez. Y esas medidas tan abruptas son las que elevaron incluso más el impacto de una crisis totalmente sobrevenida y de la que todavía se siguen aprendiendo muchas lecciones.

A ello se sumaron las «luchitas», «falta de coordinación y de visión de Estado» y el «desgobierno» que denunciaron Matilde Mas y Marcel Jansen —entre otras muchas cosas, doctores ambos en Economía—, y la sensación muy extendida de que, en general, los políticos no han estado a la altura de la crisis. También Emilio Ontiveros, que además de ser el responsable de

AFI forma parte del comité asesor de la vicepresidenta Calviño, criticó esta situación y Rubén Cayuela-Segura, que ocupa un cargo de gran relevancia en Bank of America, confirma que la imagen que se ha trasladado a Europa no ha sido en absoluto la adecuada. El desplome económico y los recelos, por lo tanto, no parecen precisamente una coincidencia.

La estructura de la economía, ya se ha apuntado, también tuvo una grandísima relevancia. Afirmar que España es un país de camareros tal vez sea excesivo. Entre otras cosas, porque no está claro que no lo sea incluso más de funcionarios. Pero sí es evidente que hay una gran dependencia del turismo y de los servicios, ámbitos que ni siquiera se sabe con seguridad cuándo podrán estar al nivel previo a la crisis y aportar. Y, al mismo tiempo, la recesión ha vuelto a poner de manifiesto que hay una importante parte de la población que desempeña labores que exigen una baja cualificación, cuya productividad es igualmente baja y que están muy alejados de la digitalización. ¿Y qué quieren decir los economistas cuando emplean estos términos? Básicamente, que si no hay un cambio sustancial, los sueldos bajos de buena parte de la población se perpetuarán y España tendrá una economía poco preparada para el futuro, que cada vez es menos futuro y más presente. Por ello, hay una coincidencia casi plena en que los fondos europeos deben ser aprovechados también

para esto y que, aunque será un tema que se abordará en siguientes capítulos con mayor amplitud y profundidad, es igualmente imprescindible un cambio en el sistema educativo. Sin embargo, la coincidencia vuelve a ser también muy importante en el momento de expresar las muchas dudas de que algo de esto ocurra realmente.

Pero hay más motivos que explican el desastre que sufrió España durante 2020, y uno de ellos ya es tan inherente a la economía nacional como su relación con el turismo y los servicios: la ingente deuda pública que acumula el país. Desde los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los diferentes ejecutivos, con independencia de su color, han sido totalmente incapaces de controlar las cuentas públicas. Zapatero llegó a tener superávit y rebajó la deuda hasta el 35 por ciento del PIB. Para contextualizar lo reducido de ese dato, basta con observar que Bruselas recomienda actualmente tener una cifra máxima del 60. Desde ese hito, que se produjo en 2007, todos los gobiernos se han embarcado en una suerte de competición por ver quién presenta cifras más disparatadas. Y ni siquiera en los años de crecimiento económico, con Rajoy primero y Sánchez después, fue posible contener el déficit.

La mejor muestra, el ejemplo que mejor caricaturiza la incapacidad de España en este aspecto, es lo que ocurrió en 2019. El Gobierno socialista ofreció una

cifra inicial de desviación presupuestaria que Europa posteriormente corrigió. Y no solo eso, sino que la revisión acabó arrojando un sonrojante incremento del déficit. Inaudito. La deuda, por su parte, acabó en el 95,5 por ciento, 1,188 billones de euros. ¿Y qué ocurrió el año siguiente? Pues lo que tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llevaban años avisando: que cuando llegase la próxima crisis, algo que sin duda ocurriría en algún momento, el espacio fiscal sería más limitado. ¿Y para qué sirve el espacio fiscal? Para tomar decisiones de gasto e inversión con las que apoyar a la economía en momentos de debilidad.

La consecuencia directa de esta situación es que, según el Banco Central Europeo (BCE), España fue el país que menos gastó en estímulos fiscales. En el cálculo, cierto es, el organismo que dirige Christine Lagarde no tuvo en cuenta medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo cual es discutible. Pero aun así, el esfuerzo se antoja insuficiente. Así lo explicaba Javier Andrés, máster en Economía por la London School of Economics, catedrático de la Universidad de Valencia y uno de los padres de la macroeconómica moderna en España:

—Las ayudas directas que ha podido incorporar el Gobierno son menores que las que han podido

hacer otros países que tenían las finanzas mucho más saneadas. La política fiscal debe actuar en situaciones como esta, pero eso solo se logra preparándose. Teníamos unas finanzas públicas en malas condiciones debido a lo que hemos pasado y porque no se ha puesto el remedio adecuado, y por lo tanto tenemos menos capacidad. Es verdad también que el ministerio tiene razón cuando aduce que hay que tener en cuenta cómo valorar los ERTE: ¿son estímulos discretivos o son estabilizadores automáticos más potentes? Es matizable.

—Esa consolidación fiscal que señala choca con la apuesta de una parte del Gobierno por elevar incluso más la deuda. Y en algunos ámbitos restan también importancia al hecho de incrementar el pasivo. ¿Ha cambiado el paradigma?

—Es cierto que con unos tipos de interés cercanos a cero la deuda es menos problemática, y que esos tipos bajos han venido para quedarse tiempo. Por lo tanto, tenemos un mayor margen de maniobra. Ahora bien, ese margen lo tenemos para poder ir más despacio en la estrategia de consolidación. Cuando esto termine tenemos que tener un plan de reducción de deuda, más pausado, más paulatino, pero razonable, sostenido y creíble. Y cumplirlo. Es cierto que la ortodoxia fiscal hay que replanteársela, lo están haciendo incluso los conservadores alemanes. Hay que replan-

teársela, no para ir a mayores niveles de deuda, sino para tratar de volver a menores niveles de deuda de una manera más paulatina. Lo dijo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos: una consolidación que comience cuando esto termine, que sea inteligente y bien diseñada y que sea persistente y continuada. Tenemos que ganar credibilidad.

Pero por ahora, ni rastro de esto que piden Andrés, el Banco de España, la AIReF y todos los economistas con los que he hablado. Bueno, todos salvo Eduardo Garzón, quien como veremos un poco más adelante defiende una postura un tanto diferente y peculiar.

Tampoco hay ninguna duda sobre lo adecuado e importante que han sido los ERTE. Es algo incuestionable. Sin esta medida, las cifras de paro hubiesen sido peores y, mucho más importante, una gran parte de la población hubiese perdido protección social. Algo más de 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar en esta situación. Más que toda la población de la ciudad de Madrid, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Afortunadamente, ese dato se redujo rápidamente. Pero quedaron dos heridas profundas. Una, que cientos de miles de personas permanecen en situación de ERTE y difícilmente volverán a su puesto de trabajo después de más de un año fuera y, además, tienen un nivel de formación que les dificulta su acceso a otro empleo. La advertencia es del

Consejo Económico y Social (CES), y se puede traducir por lo siguiente: muy probablemente, estos trabajadores pasarán de una situación de ERTE a un ERE y de ahí, al paro. Y la segunda herida es la que expuso Florentino Felgueroso, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y una eminencia en el ámbito laboral:

—En torno a ocho millones de personas han perdido renta, incluyendo a la gente que ha estado en ERTE y que no ha percibido el mismo salario. El paro de larga duración ha aumentado de forma notable, se ha incrementado en un millón el número de personas que llevan más de un año como demandantes. Hay muchos hogares que han visto disminuir su renta y no están para tanta euforia.

Tanta euforia, es necesario aclarar, como la que espera el Gobierno en el desembolso de los ahorros acumulados. Aunque, como prosigue el propio Felgueroso, España es un país bipolar que se hunde ante las adversidades económicas y se dispara en los momentos de bonanza, por lo que todo es posible. Una gran descripción, y no necesariamente solo de las características económicas de España.